

NOTIFICACIONES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
AL TITULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO MASAHUAT, A TRAVÉS DE SU OFICIAL DE
INFORMACIÓN

HAGO SABER: que en el procedimiento administrativo de apelación NUE 53-A-2020 (SP), el Instituto de Acceso a la Información Pública, con fecha 25 de septiembre de 2020, ha pronunciado la resolución que literalmente **DICE:** "....."



NUE 53-A-2020 (SP)

██████████ contra **Municipalidad de San Pedro Masahuat**

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cincuenta minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

1. Descripción del caso:

A. ██████████ (en adelante “el apelante”) apeló ante este Instituto en contra de la resolución de referencia 02/2020 UAI PSM, emitida el veinte de febrero del presente año por la Oficial de Información de la **Municipalidad de San Pedro Masahuat** (en adelante “la municipalidad” o “ente obligado”), que denegó información consistente en:

1. *Copia certificada de la orden de compra y servicio número 28991, de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve.*
2. *Copia certificada del expediente de UACI correspondiente a dicha orden de compra.*
3. *Copia certificada de la resolución que dejó sin efecto dicha orden, con su correspondiente notificación o la constancia de inexistencia.*

Al respecto, el oficial de información de dicho ente obligado, resolvió que no podía entregarse la información solicitada debido a que la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones Institucional (UACI) que resguarda dicha información, no ha presentado

respuesta a lo requerido; razón por la que el apelante se mostró inconforme con dicha resolución y presentó recurso de apelación de conformidad a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

B. El Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada **Silvia Cristina Pérez Sánchez** como instructora del presente procedimiento.

El informe justificativo al que se refiere el Art. 88 de la LAIP no fue rendido por el ente obligado.

C. La audiencia oral se llevó a cabo de manera virtual en la fecha y hora señalada, por medio de la plataforma “Meet” de Google, únicamente con la comparecencia del apelante [REDACTED] quien manifestó no contar con incidentes que plantear para la no realización de la misma, ni prueba que ofertar para ser incorporada al procedimiento.

En la fase de alegatos, la parte apelante manifestó, en lo medular, que fundamenta su decisión debido a que existía una orden de compra con cierta empresa y que de un día para otro la dejaron sin efecto, lo cual se les informó únicamente de manera verbal. Luego, mencionó que se acercaron a la municipalidad para hacer un arreglo directo con ellos, obteniendo como respuesta que dicha orden de compra nunca existió. En razón de lo anterior, ratificó su solicitud de información pues considera que esa información debe existir en los archivos de la municipalidad.

2. Análisis del caso:

Para el análisis que nos concierne, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** Principio de máxima publicidad y sus efectos; **(II)** Análisis del caso en concreto.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el Artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe

estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones”².

En ese orden, el Art. 4 letra “a” de la LAIP establece la máxima publicidad como principio rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. Entonces, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

¹ Corte IDH., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte IDH., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.p

³ Corte I.D.H.- *Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem

⁷ Ídem

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad”, que **“las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”**, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”⁸.

II. Para el caso en comento, el ente obligado no entregó la información solicitada debido a que la Unidad Administrativa correspondiente no la remitió oportunamente a la Unidad de Acceso a la Información Pública de dicha municipalidad.

El Art. 6 de la LAIP, define como **información pública** aquella información en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fecha de elaboración y que no sea confidencial. Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada, o conservada por estos a cualquier título.

Por otro lado, el mismo artículo 6 define la **información pública oficiosa** como aquella información pública que los entes obligados deberán difundir al público en virtud de esta Ley, sin necesidad de solicitud directa. Este tipo de información siempre debe estar a disposición del público, debe divulgarse y actualizarse constantemente, para que los interesados puedan acceder a ella sin ningún inconveniente. Por ello, el Art. 10 de la LAIP establece una serie de ítems de información y/o documentación que los entes obligados deberán divulgar oficiosamente y poner a disposición y conocimiento de los ciudadanos.

⁸ Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp

En tal sentido, de conformidad con el Art. 10 ordinal 19 de la LAIP, las contrataciones y adquisiciones formalizadas o adjudicadas en firme constituyen información pública oficiosa. En ese orden, dado que la información objeto de este procedimiento de apelación se encuentra relacionada a una orden de compra, debe entenderse que los datos solicitados no están sujetos, en principio, a ningún tipo de restricción.

De igual forma, este Instituto considera a bien enfatizar que la LAIP se ve permeada por el principio de Máxima Publicidad, positivado en su art. 5, lo que implica que siempre que exista duda sobre el carácter público o sobre alguna de las excepciones, se hará prevalecer el criterio de publicidad. Aunado a lo anterior, ya que no ha existido pronunciamiento por parte de la **Municipalidad de San Pedro Masahuat**, no es necesario entrar a analizar una postura contraria en la que se argumente la reserva o la confidencialidad de la información.

En consonancia con las disposiciones arriba citadas, es concluyente que no existe ninguna razón legítima para restringir al apelante el acceso a la información requerida, máxime si se trata de información que debe estar a disposición del público sin necesidad de mediar solicitud de información, por lo que esta debe ser entregada a la brevedad de manera íntegra, salvo que alguno de esos documentos consigne en su contenido datos personales de terceros, tales como: números de DUI, NIT, cuentas bancarias, direcciones de correo electrónico, números telefónicos, entre otros datos personales que puedan constar en dicha documentación y sean susceptibles de ser protegidos; en cuyo caso la información deberá ser entregada en versión pública, de conformidad al Art. 30 de la LAIP.

3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 2, 6, 85 y 86 de la Cn; 52 Inc. 3°, 58 letra “d”, 94, 96 letra “d” y 102 LAIP; a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **RESUELVE**:

a) Revocar la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Municipalidad de San Pedro Masahuat**, de fecha 20 de febrero de 2020, que denegó el acceso a la siguiente información: *i) copia certificada de la orden de compra y servicio número 28991, de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve; ii) copia certificada del expediente de UACI correspondiente a dicha orden de compra; y, iii) copia certificada de la resolución que dejó*

sin efecto dicha orden, con su correspondiente notificación o la constancia de inexistencia;
por los motivos expuestos en la presente resolución.

b) Ordenar al titular o máxima autoridad de la **Municipalidad de San Pedro Masahuat** que, dentro del plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, entregue – a través de su oficial de información – al ciudadano [REDACTED], la siguiente información: *i) copia certificada de la orden de compra y servicio número 28991, de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve; ii) copia certificada del expediente de UACI correspondiente a dicha orden de compra; y, iii) copia certificada de la resolución que dejó sin efecto dicha orden, con su correspondiente notificación o la constancia de inexistencia*, por ser información de naturaleza eminentemente pública. Dicha información deberá ser entregada de acuerdo a la modalidad de entrega indicada por el ciudadano en su solicitud de información y de forma íntegra, salvo que alguno de esos documentos consigne en su contenido datos personales, en cuyo caso deberá entregarse una versión pública, de conformidad al Art. 30 de la LAIP.

c) Ordenar al titular o máxima autoridad de la **Municipalidad de San Pedro Masahuat**, que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra “b” de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe deberá ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede, pues con esta resolución queda agotada la vía administrativa de conformidad al Art. 131 de la LPA, quedando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

g) Publíquese esta resolución oportunamente.

Notifíquese.

[illegible]